

Enero 30 de 1947 (Mañana)

87ª REUNION — 28ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo y señor Silverio Pontieri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

DIPUTADOS PRESENTES:

Ambriou, Oscar E.  
Alvarez, Juan Daniel  
Alvarez, Néstor  
Alvarez Pereyra, Manuel  
Alvarez Pérez, Vicente  
Alvarez Voces, Enrique  
Allub, Rosendo  
Aráoz, Ricardo E.  
Arévalo Cabeza, Jabel  
Argaña, José M.  
Arias, José  
Bagnasco, Vicente  
Barreiro, Carmelo  
Baulina, Angel V.  
Benítez, Antonio J.  
Bertini, Amadeo  
Bonazzola, Romeo E.  
Boullosa, Emilio M.  
Braga, Juan Carlos  
Busaniche, Julio J.  
Bustos Fierro, Raúl  
Calcagno, Alfredo D.  
Cámara, Guillermo F.  
Cámpora, Héctor J.  
Camus, Eloy P.  
Candiotti, Alberto M.  
Casal, Raúl M.  
Casas Noblega, Armando  
Cleve, Ernesto  
Colom, Eduardo  
Cooke, John William  
Córdova, J. Salvador  
Corvatián, Luciano R.  
Curchod, Amado J.  
Decker, Rodolfo A.  
Degreef, Juan Ramón  
De la Torre, Juan  
Del Carril, Emilio Donato

Del Mazo, Gabriel  
Dellepiane, Luis  
Díaz Colodrero, Justo  
Díaz de Vivar, Joaquín  
Díaz, Manuel M.  
Dufau, Juan Adolfo  
Fajre, José Benito  
Fernández, Baltasar S.  
Fernández, Hernán S.  
Ferrando, Manuel P.  
Ferrer, Modesto  
Fregossi, Luis J.  
Frondizi, Arturo  
Galvagni, Saverio M.  
Garaguso, Bernardino Hipólito  
Garay, Marcelino S.  
García, Manuel  
García Quiroga, Alejandro  
Gericke, Carlos Gustavo  
Giménez Vargas, Francisco  
González Funes, Tomás  
Guardo, Ricardo C.  
Guillot, César Joaquín  
Klix López, Guillermo  
Larco, Ricardo  
Lasciar, Guillermo F.  
Letamendi, Balbino (h.)  
Liceaga, Félix J.  
López Serrot, Oscar  
Mac Ray, Luis R.  
Mainieri, D. Jacinto  
Malecek, José Enrique  
Martínez Guerrero, Guillermo  
Martínez Luque, Enrique  
Mendiondo, F. Daniel  
Messina, Humberto  
Montes de Oca, Carlos  
Montiel, Alcides E.  
Mosset Iturraspe, Mario  
Mujica, Rodolfo  
Noriega, Juan J.  
Orozco, Modesto V.

Osinalde, Rafael  
Peña Guzmán, Solano  
Perea, Pedro J.  
Pérez de la Torre, Horacio  
Petruzzi, Miguel  
Pirani, Antonio S.  
Pomar, Gregorio  
Ponce, Angel L.  
Pontieri, Silverio  
Pueyrredón, Horacio Honorio  
Raña, Eduardo Antonio  
Ravignani, Emilio  
Reyes, Cipriano  
Reynés, Leandro R.  
Rodríguez de la Torre, Raúl  
Rodríguez, Nerio M.  
Rojas, Absalón  
Rojas, Nerio  
Rossi, José  
Rubino, Sidney Nicolás  
Rumbo, Eduardo I.  
San Millán, Ricardo Antonio  
Santander, Silvano  
Saravia, Teodoro S.  
Sarmiento, Manuel  
Sarrante José Roberto  
Sobral, Antonio  
Solana, Emilio  
Sustaita Seeber, Héctor  
Tejada, Ramón Washington  
Tommasi, Víctor M.  
Toro, Ricardo  
Uranga, Raúl L.  
Valdez, Celestino  
Velloso Colombres, Manuel F.  
Vergara, Amando  
Villafañe, José María  
Visca, José Emilio  
Vischi, Albino  
Zanoni, Pedro P.  
Zara, Edmundo Leopoldo  
Zinny, Mario

AUSENTES, CON LICENCIA:

Andreotti, Antonio  
Antille, Diógenes C.  
Ayala López Torres, Francisco  
Ayerbe, Lázaro Balbino  
Beretta, Eduardo  
Brugnerotto, Juan N. D.  
Cufre, Orlando H.  
Cuminetti Correa, Alcides D.  
Dri, Roberto  
Errecart, Juan A.  
Ianspolsky, Angel  
Jofré, Hernán R.  
Kees, Gaspar  
Lencinas, José R.  
Mántaras, Manuel J.  
Mariategui, Angel S.  
Marotta, José  
Moreno, José Luis  
Otonello, Benito J.  
Palacio, Ernesto  
Pasquini, José P. D.  
Pastor, Reynaldo A.  
Polizzi, Juan  
Ricagno, Roberto  
Rodríguez, Manuel  
Rougier, Valerio S.  
Sammartino, Ernesto E.  
Sergentini, Mario Alberto  
Urdapilleta, Oscar C.

AUSENTES, CON AVISO

Balbin, Ricardo  
Graña Etcheverry, Manuel  
Obeld, Leonardo  
Repetto, Agustín  
Tesorieri, José V.  
Vanasco, Julio A.

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría.

2.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se remite copia del decreto de inclusión en las sesiones extraordinarias del proyecto de ley sobre derogación del artícu-

lo 7º de la ley 12.915, de sueldo anual complementario a los servidores del Estado.

II.—Despachos de comisiones.

III.—Peticiones particulares.

IV.—Proyecto de ley de los señores diputados Casal y Curchod: incorporación al régimen de las leyes de obras públicas 12.576 y 12.815, de un crédito con destino a la

construcción y reparación del edificio para la Escuela San José de la Montaña, de Mackenna, provincia de Córdoba.

V.—Proyecto de ley del señor diputado Aráoz y otros: extensión de los beneficios de la ley 12.903 a los pensionistas de la ley de amparo 4.235.

VI.—Proyecto de ley de los señores diputados Pérez de la Torre y Uranga: subsidio a la Sociedad Colombófila La Zarateña, de Zárate, provincia de Buenos Aires.

VII.—Proyecto de ley del señor diputado Pérez de la Torre: incorporación al régimen de las leyes de obras públicas 12.576 y 12.815, de créditos para obras de instituciones sociales y deportivas de Zárate, provincia de Buenos Aires.

VIII.—Proyecto de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:

1.—Del señor diputado Aráoz y otros, sobre ampliación del tratado celebrado con la República de Chile.

3.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Errecart, Cufre, Lencinas, Mariategui y Dri.

4.—Integración de comisión.

5.—Continúa la consideración del proyecto de declaración sobre inclusión en las sesiones extraordinarias del proyecto de ley de intervención a la provincia de Santa Fe.

6.—Se acuerda autorización a los miembros de la Comisión de Legislación Penal para realizar una gira por el interior del país.

7.—Indicación del señor diputado Martínez Guerrero, de pronto despacho del proyecto de declaración sobre rebajas de las tarifas de transportes aéreos.

8.—Moción del señor diputado Fernández (H. S.) para que se trate sobre tablas el proyecto de ley, en revisión, sobre crédito extraordinario con destino a la Imprenta del Congreso.

9.—Moción del señor diputado Candiotti, de preferencia para el proyecto de ley sobre ratificación de decretos leyes relacionados con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

10.—Manifestaciones sobre plan de trabajo de la Honorable Cámara.

11.—Consideración del proyecto de ley, en revisión, a que se refiere el número 8 de este sumario. Se sanciona.

12.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, en revisión, sobre creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

—En Buenos Aires, a los treinta días del mes de enero de 1947, siendo las 9:

1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Díaz. — Pido la palabra.

Señor presidente: sugiero que se llame hasta media hora más, a fin de obtener quórum.

Sr. Presidente (Guardo). — Si hay asentimiento, así se hará; tan pronto se consiga número se iniciará la sesión.

—Asentimiento.

—A las 9 y 30:

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a pasar lista, señores diputados.

—Se pasa lista.

—Diputados presentes: Alvarez (J. D.), Alvarez (N.), Alvarez Pereyra, Alvarez Pérez, Alvarez Vocos, Allub, Aráoz, Arévalo Cabeza, Argaña, Arias, Barreiro, Baulina, Benítez, Bertini, Bonazzola, Boullosa, Braga, Busaniche, Bustos Fierro, Calcagno, Cámara, Cámpora, Camus, Candiotti, Casal, Casas Noblega, Cleve, Cooke, Córdoba, Corvalán, Curchod, Degreef, de la Torre, del Mazo, Dellepiane, Díaz, Díaz Colodrero, Fajre, Fernández (B. S.), Fernández (H. S.), Ferrando, Ferrer, Frondizi, Garaguso, Garay, García, García Quiroga, Gericke, Giménez Vargas, González Funes, Guillot, Klix López, Lasciar, Letamendi, Liceaga, Mac Kay, Maineri, Malecek, Martínez Luque, Mendiando, Messina, Montes de Oca, Mosset Iturraspe, Mujica, Noriega, Orozco, Osinalde, Perea, Petruzzi, Pirani, Pomar, Ponce, Raña, Ravignani, Reynés, Rodríguez de la Torre, Rodríguez (N. M.), Rojas (A.), Rojas (N.), Rossi, Rubino, Rumbo, San Millán, Saravia, Sarmiento, Sarraute, Sobral, Solanet, Sustaita Seiber, Tejada, Tommasi, Toro, Valdez, Velloso Colombres, Vergara, Villafañe, Visca, Vischi, Zanon, Zara y Zinny.

2

## ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Guardo). — Queda abierta la sesión con la presencia de 99 señores diputados en el recinto.

Por Secretaría se dará lectura de los asuntos entrados.

**Sr. Presidente** (Guardo). — El Congreso nunca ha trabajado en forma tan intensa como lo ha hecho este año.

**Sr. Rojas (N.)**. — Más que conocer lo que ha sucedido, me interesa que no siga sucediendo. Por eso, solicito que la Presidencia adopte las medidas necesarias para que se subsanen los inconvenientes indicados.

**Sr. Presidente** (Guardo). — La Presidencia tratará de subsanarlos.

Se va a votar si se acepta la modificación introducida por el Honorable Senado al proyecto de ley, que fuera pasado en revisión, relativo a la apertura de un crédito destinado a la Imprenta de la Cámara de Diputados.

**Sr. Ravignani**. — Podría leerse nuevamente el texto del proyecto de ley sancionado por este cuerpo.

—Se lee.

**Sr. Secretario** (Zavalla Carbó). — El Honorable Senado modifica el encabezamiento del artículo 1º en la siguiente forma:

Artículo 1º — Acuérdate a la Imprenta del Congreso, ley 11.601, un crédito extraordinario por la suma de 350.000 pesos, de acuerdo con el siguiente detalle...

**Sr. Ravignani**. — Interesa la lectura del artículo hasta la palabra «detalle».

**Sr. Presidente** (Guardo). — Entonces, se va a votar si se acepta la modificación establecida por el Honorable Senado a la primera parte del proyecto de ley que le fuera pasado en revisión.

**Sr. Degreaf**. — No se acepta.

**Sr. Fernández (H. S.)**. — Eso es lo que he solicitado. La Cámara insiste en su sanción.

—Se llama para votar.

—Obtenido quórum:

**Sr. Presidente** (Guardo). — Se va a votar si se acepta la modificación introducida por el Honorable Senado al proyecto de ley, que le fuera enviado en revisión, sobre crédito a la Imprenta de la Cámara de Diputados.

—Resultado negativa de 59 votos; votan 82 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Guardo). — Se comunicará la sanción de la Honorable Cámara.

12

## CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

(Orden del día número 211)

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General ha estudiado en mayoría, el proyecto de ley en revisión

que se refiere a la creación del Cuerpo de Abogados del Estado (expediente 111-S-1946); y, por las razones que dará el señor miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 10 de diciembre de 1946.

*José M. Argaña. — José Roberto Sarraute. — Juan de la Torre. — José P. D. Pasquini. — Nerio M. Rodríguez. — Manuel F. Velloso Colombes.*

En disidencia:

*Tomás González Funes. — Absalón Rojas.*

En disidencia:

*Justo Díaz Colodrero.*

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1946.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Créase el Cuerpo de Abogados del Estado. Tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración.

Art. 2º — Será director general del cuerpo el procurador del Tesoro y en caso de ausencia o impedimento de éste, el subprocurador del Tesoro, sin perjuicio de las funciones que tienen asignadas por leyes especiales. Estos serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Art. 3º — El Cuerpo de Abogados del Estado se compondrá de una dirección general y delegaciones en cada uno de los ministerios, secretarías de Estado y reparticiones de la administración de jurisdicción nacional que tengan actualmente constituidas asesorías o direcciones de asuntos legales y las que en lo sucesivo puedan crearse.

Art. 4º — Serán funciones del Cuerpo de Abogados del Estado que se ejercerán por la dirección general o por las distintas delegaciones, según corresponda:

- a) Representar al Estado y a sus reparticiones ante las autoridades judiciales, tanto si aquél litiga como actor o si lo hace como demandado, siempre que no

corresponda esta actuación al ministerio fiscal. También representarán al Estado ante los tribunales contencioso-administrativos;

- b) Instruir los sumarios que el Poder Ejecutivo o los organismos administrativos les encomienden para esclarecer la comisión de hechos punibles o irregularidades atribuidas al personal de la administración o a terceros, y preparar, cuando corresponda, el traslado a la autoridad judicial competente de lo actuado;
- c) Asesorar a las autoridades a que se hallen adscritos en todo asunto en que los mismos requieran una opinión jurídica;
- d) Promover el ajuste de los trámites administrativos a las leyes que los regulen y ser los ordenadores de lo contencioso del Estado, informando en la resolución de los recursos administrativos establecidos y que se establezcan y velando por el recto procedimiento;
- e) Intervenir los pliegos de condiciones para licitaciones públicas, redes de obras o servicios públicos o de adquisición de materiales, en las adquisiciones sin subasta previa cuando su importancia lo requiera, en la adjudicación en cuanto a la redacción de contratos, en las reclamaciones a que dé lugar la interpretación de éstos y en los pedidos de rescisión de los mismos. La reglamentación determinará los casos en que estas intervenciones sean necesarias;
- f) Asesorar sobre todo punto de interpretación legal o reglamentaria y en todo pedido de franquicia o exención de cualquier clase de contribuciones o impuestos y en aquellos casos en que deba decidirse sobre tributaciones que no se hallen expresamente previstos en las leyes y reglamentos;
- g) Realizar estudios profesionales para mejorar las leyes y reglamentaciones vigentes en la administración pública.

Art. 5º — La dirección general, como asesora del Poder Ejecutivo, y las delegaciones, compondrán las asesorías de los distintos ministerios y reparticiones, pero estas últimas deberán supe-  
 ditar su acción a las instrucciones que imparta la primera para unificar criterios. Además, deberán elevar en consulta aquellos casos cuya resolución pudiera implicar la fijación de un precedente de interés general para toda la administración, y solicitarán su patrocinio en los litigios en que se debatan asuntos de la misma índole o que por la magnitud de los intereses estatales en juego requieran la atención de las autoridades superiores del cuerpo.

Art. 6º — La dirección general estará compuesta de los siguientes organismos:

- a) Dirección general, con el número de funcionarios necesarios del cuerpo que fije la ley de presupuesto, que tendrán a su cargo la redacción de instrucciones generales, contestación de las consultas de las delegaciones y el patrocinio letrado de los asuntos a que se refiere el artículo anterior;
- b) Inspección de delegaciones, que sostendrá el prestigio del cuerpo, la recta conducta y competencia de sus funcionarios y formará los tribunales calificadores para los ingresos y promociones, preparando previamente los programas correspondientes;
- c) La dirección general bajo el ordenamiento del procurador del Tesoro podrá actuar como oficina técnica de derecho administrativo y de lo contencioso del Estado, y se expedirá sobre todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias. Cuidará en tal sentido de que las delegaciones propongan las reformas que la realidad práctica aconseje.

Art. 7º — Las delegaciones se organizarán de acuerdo con las necesidades del organismo administrativo a que se hallen adscritas y dependerán disciplinariamente de este último, sin perjuicio de su dependencia de la dirección general, desde el punto de vista estrictamente profesional. A tal efecto, los departamentos del Estado solicitarán de la dirección general el número de funcionarios del cuerpo que según su organización sean necesarios.

Art. 8º — El Cuerpo de Abogados del Estado se constituirá como una carrera especial dentro de la administración con su escalafón propio. El ingreso a ella sólo podrá tener lugar mediante concurso oposición que demuestre en el aspirante, además de los conocimientos generales de derecho, conocimientos suficientes de derecho administrativo y organización del Estado. Las promociones se harán respetando rigurosamente el orden jerárquico y siempre con informe favorable de la inspección.

Art. 9º — Independientemente de la categoría correspondiente al puesto que se desempeñe, existirá la categoría personal, a la que corresponderán ascensos por quinquenios.

Art. 10. — Para la formación del cuerpo se tendrá en cuenta la constitución actual de las asesorías letradas de los actuales organismos, eligiendo a los funcionarios que desempeñen función específica para la que se necesite el título de abogado. Esta elección deberá hacerla el Poder Ejecutivo, previo informe de la dirección general por medio de su inspección.

Art. 11. — El funcionario con empleo en la administración, aunque posea título de abogado, no tendrán derecho a ser considerados como integrante del cuerpo, si no desempeña funciones específicas de asesoramiento o abogacía, aunque se halle adscrito a una asesoría u oficina de asuntos legales.

Art. 12. — Una vez constituido el cuerpo sobre tales bases, se estudiarán las vacantes que pudieran llenar y las que en lo sucesivo convenga ocupar, y se llamará a concurso oposición para completar el número de funcionarios componentes del cuerpo.

Art. 13. — Para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado se necesita: 1º, ser ciudadano argentino; 2º, poseer el título de abogado expedido por una universidad nacional; 3º, ser mayor de 25 años; 4º, informes de conducta dimanados de las autoridades y de una investigación especial; 5º, no estar sujeto a ningún procedimiento de carácter penal, y 6º, no hallarse en quiebra ni en concurso.

Art. 14. — La dirección general elaborará el programa de materias y de los ejercicios teóricos y prácticos que deban constituir el concurso oposición, y la reglamentación determinará la constitución del tribunal clasificador y la forma de actuar del mismo para calificar a los aspirantes. El orden de calificación determinará el lugar que en lo sucesivo ocupe en el escalafón del cuerpo.

Art. 15. — Ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que específicamente ejerza función para la que precise el título de abogado sin oír previamente a la dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra dentro de las que corresponden al cuerpo, y, siendo así, propondrá el nombre de los funcionarios que se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos.

Art. 16. — Los abogados del Estado podrán ser trasladados de una repartición a otra por necesidades de servicio, o cuando lo disponga la dirección general para la mejor formación profesional de los funcionarios del cuerpo.

Art. 17. — Los haberes de estos funcionarios serán abonados por el departamento o repartición en que presten servicios y con cargo al presupuesto del mismo y la categoría que corresponda.

Art. 18. — La dirección central del cuerpo seleccionará los funcionarios que actualmente presten servicio, inclusive sometiéndoles a concurso oposición.

Art. 19. — Esta ley es asimismo de aplicación a las asesorías legales de las instituciones bancarias del Estado.

Art. 20. — El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el término de noventa días.

Art. 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dios guarde al señor presidente.

J. HORTENSIO QUIJANO.  
Alberto H. Reales.

**Sr. Presidente** (Guardo). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

**Sr. Sarraute.** — La mayoría de la Comisión de Legislación General se ha expedido aconsejando la sanción de este proyecto de ley, venido en revisión.

Por esta iniciativa, se encabeza el plan quinquenal del gobierno de la revolución, se crea el Cuerpo de Abogados del Estado.

El Cuerpo de Abogados del Estado no viene a constituir nada más que un sistema de organización o estructuración armónica de todas las oficinas, delegaciones y asesorías jurídicas de reparticiones del Estado.

Por medio de este nuevo organismo, que reunirá a todas las oficinas jurídicas de las reparticiones nacionales, dedicadas a un mismo fin, cual es la defensa de los intereses del Poder Ejecutivo, que son los de la colectividad, y al asesoramiento de los funcionarios que ocupan cargos de importancia en la administración, se considera el problema de manera integral y no desde un punto de vista localista.

Con el sistema actual, que permite la existencia de oficinas, delegaciones, y asesorías jurídicas, los problemas se contemplan con un carácter localista, con un criterio particular, y no con un sentido de planificación, con un sentido integral para la consideración de todos los problemas; en realidad, ha habido entidades organizadas con un criterio de dependencias particulares sin integrar un sistema total. Por ello se hacía necesaria la estructuración de este sistema orgánico, de este cuerpo que viene a constituir una entidad dedicada especialmente a la defensa de los intereses del Estado y que actúe en esa defensa con un criterio racional e integral, teniendo en mira, por encima de todo, los altos intereses del pueblo que están comprometidos en el ejercicio de esta asesoría en su doble función de asesoramiento y de defensa de los intereses del Estado.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Honorable Cámara, don Silverio Pontieri.

Lo interesante de este proyecto de ley es que con él no se afecta la estructura actual de los organismos existentes. Sobre la base de lo que existe se organiza, se puede decir, un sistema, y se procede de una manera tal que se le da unidad sin tocar lo existente, con el solo afán de perfeccionarlo y obtener un mecanismo más

eficiente y más económico. Se tiene en vista la idea que debe prevalecer en todo momento en las organizaciones de Estado, es decir, que los servicios se presten con rapidez y con economía.

Podemos decir que este proyecto tiene antecedentes valiosos. En la legislación extranjera encontramos antecedentes en los Estados Unidos de América y en Italia. En Norte América existe un sistema, también centralizador de defensa de los intereses del Estado, con una diferencia con respecto al proyecto de ley que consideramos y que consiste en que faculta a los representantes rectores de esa dirección específica para poder delegar esa atribución de defensa en profesionales particulares que por su competencia y especialización notoria puedan actuar con mayor eficacia.

El sistema que se implanta por este proyecto de ley se asemeja más al sistema italiano. En Italia se estableció el sistema de abogados del Estado para la defensa de los intereses del mismo en el año 1926, por medio de una ley especial.

Por este proyecto de ley se tiende a establecer un sistema de asesoramiento y de defensa de los intereses del Estado, para la defensa activa y pasiva, es decir, para la demanda y defensa propiamente dicha. Para ello se estructura una dirección general dependiente del procurador del Tesoro. Esa dirección general dará a todo este organismo las directivas necesarias. Específicamente, esas directivas son de carácter profesional, puesto que, como ya dije, se mantiene el sistema existente en las distintas reparticiones en lo que se refiere a los organismos de asesoramiento. La dependencia de esos organismos dentro de esas reparticiones sigue siendo administrativa y disciplinariamente de la repartición a que pertenece, y tan sólo dependerá de la dirección general en el sentido de la orientación profesional y de la orientación doctrinaria por medio de los dictámenes que dé la dirección general sobre las normas a seguir.

En este proyecto de ley se establece un sistema ventajoso para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado y un escalafón para el personal. Su finalidad es dotar a este organismo específico de defensa de los altos intereses del Estado de un personal competente completamente especializado. Por medio de los exámenes de ingreso se logrará que los representantes del Estado tengan una gran preparación y conocimiento de la materia específica, porque se les exige, aparte de los conocimientos generales, que posean estudios bastante completos sobre la materia administrativa y derecho en general.

Con el sistema del escalafón se garantiza una estructura independiente y, a la vez, se valoriza la función, pues se apreciarán las condiciones personales, ya que por medio de este sistema de escalafón el funcionario del Estado que tiene

a su cargo la función específica de la defensa de los intereses del fisco tendrá garantizado su ascenso y compensado su desvelo.

También es interesante destacar la disposición del artículo 16 de este proyecto, que establece que los abogados del Estado podrán ser trasladados de unas reparticiones a otras. Con esa medida se evitará el enquistamiento actual del defensor del Estado que actúa específicamente y limita su acción y su preparación a un determinado organismo. Mediante la disposición del artículo 16, el abogado del Estado podrá tener conocimiento integral de todos los problemas que afectan al fisco nacional y, cuando actúe en determinada repartición, podrá encarar los juicios que a ella afectan con una visión total de las necesidades del Estado, lo cual le permitirá actuar en forma más acabada y más beneficiosa.

Por las razones expuestas, la Comisión de Legislación General aconseja a la Honorable Cámara la sanción del proyecto de ley que dejo informado. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Pontieri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la primera disidencia.

**Sr. Rojas (A.).** — Esta ley forma parte del plan quinquenal, el llamado plan quinquenal, que no es quinquenal ni constituye propiamente un plan. Un plan quinquenal, en el concepto impuesto y divulgado por el precedente ruso, es un conjunto de realizaciones tendientes a fomentar el progreso económico dentro de un lapso determinado.

Este plan carece de plan. Además, este plan contiene de todo: desde el propósito de fomentar la procreación mediante el matrimonio religioso, hasta el de construir usinas hidroeléctricas que nos proporcionarían la energía suficiente para electrificar todo el sistema planetario —tan gigantesco es como se lo concibe—, e incluye también el Cuerpo de Abogados del Estado, asunto concreto del cual debo ocuparme.

Esto de la procreación fomentada por el matrimonio religioso parecería una humorada, pero forma parte integrante del famoso plan.

**Sr. Rumbo.** — Señor diputado: ¿podría indicarme cuál es el crecimiento demográfico de la República?

**Sr. Rojas (A.).** — No es mi especialidad, señor diputado. Hice una alusión, incidental...

**Sr. Rumbo.** — Como hablaba del matrimonio, que es un medio para estimular el aumento de la población, preguntaba al señor diputado si conocía el índice del crecimiento demográfico.

**Sr. Baulina.** — Oportunamente vamos a ver cómo influye el matrimonio religioso en el problema de la nupcialidad.

**Sr. Rumbo.** — Estamos en el problema del crecimiento demográfico de la población y éste es el origen de la pregunta concreta que formulé.



**Sr. Frondizi.** — Estamos dispuestos a dar esa información, que seguramente conoce el señor diputado Rumbo, siempre que diga, si cree que el matrimonio religioso fomentará el aumento de la población.

**Sr. Rumbo.** — El matrimonio legítimo es una forma indirecta de incrementar la población.

**Sr. Rojas (A.).** — A eso voy.

**Sr. López Serrot.** — Le están preguntando si es el matrimonio religioso...

**Sr. Rojas (A.).** — Esto de la procreación fomentada por el matrimonio religioso parecería una humorada mía...

**Sr. Bagnasco.** — No lo parece; lo es.

**Sr. Rojas (A.).** — ...pero, sin embargo, es parte del plan.

**Sr. Rumbo.** — Y se justifica.

**Sr. Rojas (A.).** — Invito a los señores diputados a que abran el apéndice gráfico en la página 23, donde se encontrarán con un recuadro que dice: «La natalidad.» De ahí, una raya conduce a otro que dice: «Fomento de la nupcialidad y natalidad.» De ahí a otro que dice: «Medidas», y luego a otro que expresa: «Entre las medidas para el aumento de la natalidad: validez civil del matrimonio religioso.» Parecería que el gobierno atribuye virtudes fertilizantes a la bendición eclesiástica. (*Risas.*)

**Sr. Rumbo.** — Es que el civil y el religioso son las dos formas generalizadas del matrimonio.

**Sr. Rojas (A.).** — Los gráficos explicativos del plan merecerán capítulo aparte.

Dentro de la pedagogía, el sistema de esquemas gráficos tiene por objeto hacer accesibles a las mentalidades infantiles ciertas nociones cuya captación sería difícil y confusa por medios puramente discursivos.

Hay un reflejo de cierto infantilismo, característico de la psicología militar, en este apéndice de dibujitos con que se acompaña la edición del plan.

En Santiago del Estero hemos tenido un caso interesante. Militaba en nuestro partido un sargento retirado que, como cualquier general, tenía también debilidad por los gráficos. Cuando se aproximaban las elecciones, nos empapelaba el comité con gráficos suscitados por el próximo acto electoral, relacionados con el monto de electores inscritos, con la distancia y concentración de los electores hasta tal mesa, con el porcentaje de votos que obtuvimos en tal elección, etcétera. Y llegamos a observar esta cosa curiosa: que a mayor cantidad de gráficos, teníamos menos probabilidades de éxito. (*Risas.*)

**Sr. Argaña.** — Eso es posible en Santiago del Estero.

**Sr. Rojas (A.).** — Y como yo soy un poco supersticioso, aspiro, para bien del país, a que

esta colección de gráficos sea la mala estrella del plan quinquenal.

Antes de entrar en materia, hubiera querido hacer algunas reflexiones generales sobre el plan quinquenal, ya que la ley que nos ocupa forma parte integrante del mismo; pero declaro que no podría hablar en serio del plan quinquenal y temo precipitar la tormenta que pondría fin a mi exposición antes de que haya entrado al tema determinante de mi intervención. Sólo diré que en el plan hay de todo, como he dicho, pero hay también de todos. Hasta tiene mi colaboración anónima.

**Sr. Bagnasco.** — ¿No será en la parte infantil?

**Sr. Rojas (A.).** — No, señor diputado; en la parte más importante: la referente a irrigación.

**Sr. Rumbo.** — Viejo problema que no ha inventado el señor diputado.

**Sr. Baulina.** — Nació el 4 de junio.

**Sr. Rumbo.** — Nació mucho antes. Lo que sucede es que ahora viene la organicidad del problema hidráulico del país con criterio integral constructivo.

**Sr. Rojas (A.).** — El plan quinquenal es el saqueo más colosal que se ha hecho a todas las iniciativas y a todos los proyectos de los gobernantes argentinos.

**Sr. Rumbo.** — No hay nada nuevo bajo el sol.

**Sr. Rojas (A.).** — Aquí todo es viejo.

**Sr. Rumbo.** — Hay mucho nuevo, y justamente la novedad reside en el aspecto orgánico y funcional de ese conjunto.

**Sr. Rojas (A.).** — Ya he dicho que hasta hay un aprovechamiento despiadado de una iniciativa parlamentaria que me pertenece. He presentado un proyecto sobre irrigación con un ordenamiento legal nuevo. El plan me lo ha usurpado, sin decir, por cierto, como siempre, su origen.

**Sr. Argaña.** — Haga la cuestión de la propiedad literaria.

**Sr. Rojas (A.).** — Como ustedes ven, me coloco también en la nómina de los hombres gobernantes víctimas del saqueo...

**Sr. Rumbo.** — El señor diputado pretende ser el padre de la criatura.

**Sr. Rojas (A.).** — ...cosa explicable en esta época de improvisados y de improvisaciones.

**Sr. Rumbo.** — ¿Qué tienen que ver los gráficos con las improvisaciones? El gráfico es precisamente una manifestación contraria a la improvisación.

**Sr. Santander.** — Justamente los gráficos constituyen una improvisación en todo el plan quinquenal, porque las cifras están puestas al azar.

**Sr. Rojas (A.).** — La verdad es que casi todas esas ideas, chicas o grandes, en las cuales se ha embebido el plan, han sido deformadas. Por

eso, constreñido a definir en cuatro palabras el plan quinquenal, hube de decir, en un reportaje, que el plan quinquenal es un programa hecho por subscripción nacional adaptado a la mentalidad militar y escrito en catalán. (*Risas.*)

Y vamos a mi tema, antes que se declare que estoy fuera de la cuestión. (*Risas.*)

**Sr. Díaz de Vivar.** — Si me permite el señor diputado...

El señor diputado por Santiago del Estero, a pesar de su espíritu volteriano, reconocerá, creo que de muy buena gana, que el jefe del socialismo, doctor Repetto, ha tenido un juicio mucho más auspicioso. No ha tomado en solfa algunas cosas del plan quinquenal, como el señor diputado, sino que las ha tomado muy en serio. Por ejemplo, en lo que se refiere a seguros sociales, ha declarado que la considera una iniciativa realmente brillante y constructiva.

Yo enfrento el juicio del señor diputado por Santiago del Estero con el juicio del doctor Repetto, jefe del socialismo metropolitano.

**Sr. Frondizi.** — Por eso, seguramente, el gobierno mandó apedrear «La Vanguardia», como una compensación. (*Risas.*)

**Sr. Rojas (A.).** — Todos admiramos la inextinguible juventud del doctor Repetto, su vigor intelectual y su fe en la acción cívica: puede haber ahí una prueba más de su optimismo juvenil.

**Sr. Bagnasco.** — Algunos diputados de la oposición también han manifestado juicios muy favorables al plan quinquenal. Un diputado cuyo nombre no deseo mencionar me ha dicho que es lo mejor que ha hecho Perón.

**Sr. Rumbo.** — Lo que pasa es que los señores diputados no lo quieren reconocer.

**Sr. Rojas (N.).** — No quiere decir que sea bueno, señor diputado. Lo que sucede es que todo lo otro era muy malo.

**Sr. Rojas (A.).** — Entrando en materia, debo confesar que esta ley de creación del Cuerpo de Abogados del Estado es lo menos malo que tiene el plan.

**Sr. Rumbo.** — Porque lo más malo ha de ser que sigamos importando por año 230.000.000 de pesos en combustibles líquidos y sólidos, con lo cual terminará la autarquía energética que prevé el plan.

**Sr. Frondizi.** — Estamos importando técnicos y hablando de autarquía para terminar entregando nuestras riquezas.

**Sr. Rumbo.** — Cuando Rusia hizo su primer plan también importó técnicos. Lo saben bien los señores diputados.

**Sr. Frondizi.** — En materia de petróleo, lo que ocurre es que se prepara una sociedad mixta con Yacimientos Petrolíferos Fiscales para entregar esa riqueza a la Standard Oil.

**Sr. Rumbo.** — No puede afirmarlo.

**Sr. Frondizi.** — Me hago absolutamente res-

ponsable de mi afirmación, de que han existido conversaciones con representantes de la Standard Oil para formar una sociedad mixta con Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esa es la razón por la cual el gobierno yanqui se resiste a enviar máquinas para extraer más combustible. Procuran en esta forma ejercer presión sobre el país. Yo pido que el gobierno me desmienta si no es cierto lo que afirmo.

**Sr. Rumbo.** — Pero en cuanto a las finalidades, eso corre por su cuenta.

**Sr. Frondizi.** — Afirmo que las conversaciones han sido concretas. Como ocurrió con los ferrocarriles y los teléfonos, se está preparando ahora una sociedad mixta con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para destruir así una organización nacional que hace honor al país.

**Sr. Rumbo.** — En cuanto a los ferrocarriles, no hay nada definitivo aún, como es de conocimiento del señor diputado.

**Sr. López Serrot.** — Esto ha permitido afirmar a un emisario yanqui, en un reportaje, que el plan quinquenal fué elaborado en octubre de 1946, en Norte América.

**Sr. Rumbo.** — ¿Pero no dicen que es catalán? ¿En qué quedamos? Resulta ahora elaborado en Norte América en octubre de 1946.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente y suena la campana de orden.

**Sr. Rumbo.** — Puedo asegurarle al distinguido émulo de Bernard Shaw, que estoy asombrado...

**Sr. Dellepiane.** — Se trata de las concomitancias internacionales del nazifalangismo.

**Sr. Rumbo.** — ¡La eterna sombra!

**Sr. Rojas (A.).** — Decía, señor presidente, que la ley de creación del Cuerpo de Abogados es lo menos malo que viene en el plan. Está escrita con precisión y con propiedad jurídica. Por eso ha de ser verdad la versión que corre de que esta parte del plan ha sido elaborada en la Procuración General del Tesoro.

**Sr. García.** — Me permite, señor diputado...

Vamos a descubrir en el día de hoy que Braden ha hecho el plan quinquenal para la Argentina...

**Sr. Zara.** — Pregúnteselo a Gay. (*Risas.*)

**Sr. García.** — ...que el plan quinquenal ha sido elaborado en los Estados Unidos. Con sorpresa, observo que ese criterio no concuerda con el antiguo de los legisladores de la oposición, que siempre buscaban un punto de referencia en los Estados Unidos. Así que nosotros les vamos a endosar a los técnicos yanquis el problema del escote, del criterio militar y, sobre todo, lo hablado en catalán.

**Sr. Rumbo.** — Y el del sargento de Santiago del Estero.



**Sr. García.** — Eso se lo dejamos al diputado Rojas, que lo va a necesitar para las elecciones futuras.

Yo, señor presidente, anhelo que se discutan con criterio sereno los veintisiete capítulos del plan quinquenal. Pido a los legisladores de la oposición que arremetan con toda violencia sobre él, que demuestren sus errores, pero sin desmerecer en absoluto el giro del debate, que debe tener un alto vuelo por la importancia misma que el plan quinquenal tendrá en la vida futura del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. López Serrot.** — Hay que destacar que ese plan, que el pensamiento del Poder Ejecutivo y al que éste ha calificado en este recinto como de excelencia máxima, en la actualidad es motivo por parte del mismo Poder Ejecutivo de revisiones y modificaciones en algunas de las leyes, que, como digo, han sido exaltadas como la máxima perfección...

**Sr. Rumbo.** — Como filosofía política planista que no puede tratarse irónicamente...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente y suena la campana de orden.

**Sr. Presidente (Pontieri).** — Continúa con la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

**Sr. Rojas (A.).** — Antes de continuar, debo decirle al señor diputado que la ironía es un recurso dialéctico de alta alcurnia socrática y que es una flor de ingenio inaccesible a este humilde quebrachito santiagueño... (*Risas.*)

El proyecto de creación del Cuerpo de Abogados del Estado es, repito, lo menos malo que tiene el plan.

**Sr. Rumbo.** — ¿Y cuál es lo más malo?

**Sr. Rojas (A.).** — Sobre eso hay mucho que decir; pero si entro en detalle me alejo del asunto.

Es posible que esta ley haya sido elaborada en la Procuración General del Tesoro; donde se cultiva una técnica, la del derecho, y no todas las técnicas, como en cierta secretaría técnica. Este enciclopedismo técnico es el absurdo más extraordinario que se concibe. La técnica es especialidad, y un secretario técnico que posee todas las técnicas, no posee ninguna.

Al decir que este proyecto es lo menos malo que tiene el plan, le hago, por cierto, un elogio muy flaco que quiero caracterizar.

No estoy de acuerdo con el plan, a pesar de cierta pulcritud de su redacción. Me opongo a esta ley por razones fundamentales y por otras de carácter secundario. Ante todo, esta institución es contraria al régimen ministerial de la Constitución argentina. La administración pública está repartida en grandes cuadros, que son los ministerios, que tienen a su frente mi-

nistros responsables, cuyas firmas validan la del señor presidente de la República.

Para comprobar lo que acabo de manifestar, basta leer los artículos 1º, 5º y 6º de esta ley. El artículo 1º, dice: «Créase el Cuerpo de Abogados del Estado. Tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico y la defensa ante los Tribunales del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración.» El artículo 5º, expresa: «La dirección general, como asesora del Poder Ejecutivo, y las delegaciones compondrán las asesorías de los distintos ministerios y reparticiones, pero estas últimas deberán supeditar su acción a las instrucciones que imparta la primera para unificar criterios. Además, deberán elevar en consulta aquellos casos cuya resolución pudiera implicar la fijación de un precedente de interés general para toda la administración, etcétera.»

El artículo 15 dispone: «Ninguna repartición nacional, ni aun un ministerio, puede hacer designaciones de asesor letrado ni de otra clase de funcionario que específicamente ejerza aquella función, sin oír previamente a la dirección del Cuerpo de Abogados del Estado.»

Es evidente, señor presidente, que esta institución está por arriba de los ministerios, que controla a los ministerios, que es un super-ministerio.

Además, esta institución está dotada de una autarquía técnica que afecta a las prerrogativas ministeriales. Los asesores que la constituyen dependen del procurador general y están fuera de la autoridad de los respectivos ministros.

Se tiende a la unificación del criterio jurídico, centralización y dogmatismo. Tales son las finalidades de esta ley.

Por otro lado, tal vez sin quererlo, se llegará a la irresponsabilidad de los asesores, se restará el estímulo del estudio en los mismos y se llegará al aniquilamiento de la iniciativa en la concepción jurídica de estos funcionarios.

En una época como ésta, en que la especialización es el ideal de la ciencia jurídica, como de todas las ciencias, se va a centralizar en un funcionario —el procurador general del Tesoro— las directivas indiscutibles, infalibles, en todos los asuntos de carácter jurídico, y esto es una monstruosidad.

El derecho administrativo, por su propio desarrollo, ha llegado a una complejidad extraordinaria. Los asuntos de impuestos internos son muy distintos a los de aduana, y éstos muy distintos a los del registro de la propiedad, pongo por caso, o a los relacionados con el régimen de marcas. No es posible que este procurador general del Tesoro sea una enciclopedia jurídica y llegue a poseer una versación ecuménica. Y ésta es una de las fallas fundamentales del nuevo sistema. Pasemos a otra.

En la exposición de motivos se dice, para dorar la pildora, que el sistema actual encarece el presupuesto, para hacernos creer que la reforma responde a propósitos de economía. Sin embargo, en el artículo 12 se dice «que una vez constituido el cuerpo sobre tales bases, se estudiarán las vacantes que se pudieran llenar y las que en lo sucesivo convenga ocupar, y se llamará a concurso oposición para completar el número de funcionarios componentes del cuerpo». Quiere decir, que, por detrás de esta ley, nos amenaza un grave problema: vamos a abrir la puerta a una nueva burocracia, a una nueva marchanta de puestos públicos.

**Sr. Vischi.** — Será universitaria.

**Sr. Frondizi.** — De la nueva universidad...

**Sr. Rumbo.** — Legado de la vieja universidad, que el señor diputado por la Capital ha reconocido que ha sido el mejor artífice de los intereses foráneos en este país.

**Sr. Frondizi.** — Que son los hombres que están aconsejando la política económica entreguista que ha hecho el gobierno de junio y que está haciendo este gobierno...

**Sr. Rumbo.** — Son los hombres que han sido eliminados de este gobierno.

**Sr. Frondizi.** — ...y que hicieron el acuerdo británico, que es la entrega más vergonzosa de la economía argentina.

**Sr. Colom.** — Política de independencia económica del país.

**Sr. Rojas (A.).** — Ese es el fondo de esta reforma, ésa es la característica del gobierno: autoritarismo, que es centralización, y por esa vía se llega al totalitarismo, que la opinión pública está denunciando como la finalidad fatal de este gobierno. La verdad es que se busca un sistema de asesorías jurídicas disciplinadas bajo la dirección de un jefe, que a su vez dependerá del jefe máximo.

Desde los albores de la Revolución —quiero decir de la Revolución de Mayo, que es la única trascendental que hemos tenido—, el país ha estado bajo el régimen de asesorías que impera en la actualidad; y bajo ese sistema, una administración pública, que habrá tenido sus manchas, ha hecho esta cosa portentosa, que es la República Argentina, en ciento cincuenta años, construyendo sobre el desierto y la incuria que nos dejó la colonia. (*Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Colom.** — ¿Conoce el señor diputado la estadística de los pleitos actuales? En el actual régimen, el gobierno pierde 89 pleitos sobre 100 demandas.

**Sr. Ravignani.** — Estará mal asesorado.

**Sr. Rojas (A.).** — Se quiere ahogar la independencia de juicio de los asesores, se quiere extirpar, como en todos los órdenes, la libertad de pensamiento y el libre examen.

**Sr. Colom.** — ¿Qué tiene que ver la libertad de pensamiento?

**Sr. Rojas (A.).** — La libertad de pensamiento de los asesores.

Repito que se quiere someter a las asesorías legales a una disciplina de cuartel, poniendo una lápida de servilismo sobre estos directores técnicos, como sobre todo el país, lápida en que se podrá escribir: «Aquí yace un pueblo que tuvo el culto de la dignidad y que se formó en el respeto de todos los valores intelectuales y morales del hombre.»

**Sr. Albrieu.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Rojas (A.).** — Voy a terminar. Pero el pueblo ha de reaccionar y no se ha de dejar enterrar vivo. Ha de reaccionar con toda la violencia de su fuerza espiritual.

**Sr. Benítez.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Rojas (A.).** — Voy a concluir, señor diputado.

**Sr. Benítez.** — Pero si concluye ya no me podrá permitir la interrupción.

Señor diputado: las afirmaciones que hace son tan extraordinarias, como lo sería el afirmar que el establecimiento de un tribunal de casación, o la existencia de la Corte Suprema, que trata de unificar el criterio jurisprudencial, es una forma de tiranía o de poner a los jueces una lápida mortuoria, cuya inscripción estaría a cargo del señor diputado.

Se ha luchado en el mundo, en forma continua, por la existencia de una corte de casación o de un tribunal superior que unifique la doctrina, y jamás, hasta que el señor diputado pronunció las palabras que acabamos de oírle, se ha entendido que tal cosa signifique una tiranía militar o una forma de ahogar la expresión popular.

**Sr. Rojas (A.).** — Voy a hacerme eco de la observación del señor diputado. La jurisprudencia y la autoridad de la misma en la vida judicial es otra cosa que este régimen autoritario que se quiere establecer. La jurisprudencia no es obligatoria para los jueces...

**Sr. Benítez.** — Cuando hay casación es obligatoria.

**Sr. Rojas (A.).** — Los jueces pueden renovar la discusión eternamente, y en esa discusión continua se transforma y vive el derecho.

**Sr. Rumbo.** — Así es como nunca terminan los pleitos.

**Sr. Rojas (A.).** — Por eso el bloque que represento va a votar en contra de este proyecto de ley, que es un paso más en el proceso de la absorción presidencial.

**Sr. Colom.** — De fiscalización de los intereses del pueblo.

**Sr. Rojas (A.).** — El presidente de la Nación ha dicho días pasados que, si es necesario, habrá que dar la vida por el plan. Acaso ha querido

insuflar en el pueblo argentino un fanatismo de guerra santa, o acaso ha querido infundirle vanamente una nueva mística.

En este régimen de economía dirigida, de producción dirigida, de exportación dirigida, este proyecto instituye una cosa universalmente nueva, que es el derecho dirigido.

Por ello, la diputación radical piensa que lo que peligra en la discusión pública del plan y en su sanción no es la vida, como ha dicho el presidente de la República, sino una cosa más sagrada, que es la libertad.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Baulina.** — Señor presidente: frente a este despacho, me encuentro en una situación, en cierto modo, paradójal. Creo que es necesario, tanto en la representación jurídica de los intereses del Estado, como en todos los órdenes de la administración pública, introducir el principio de racionalización. Indudablemente que, si se contempla en forma objetiva este proyecto de ley, en cuanto da razón de su existencia, puede darse por sentado que persigue la finalidad de realizar este principio; pero cuando se examinan las disposiciones parciales que integran el proyecto, se observa que, ante todo, tal cual él está redactado, resultará inoperante a esos fines, porque mantiene integralmente la desorganización actual en los servicios jurídicos del Estado, y sólo los agrupa para crear una especie de academia jurídica de derecho administrativo oficial, en la cual se va a producir todo ese conjunto de inconvenientes a que se ha referido el señor miembro informante de la minoría.

Las funciones que se asignan a este Cuerpo de Abogados del Estado son las mismas que realizan aisladamente los abogados, los asesores legales, el procurador del Tesoro de la Nación y todos los funcionarios que tienen a su cargo la representación del Estado, el asesoramiento de sus reparticiones y la realización del derecho administrativo en las distintas ramas de la administración pública.

Por otra parte, se crea para este cuerpo una doble jurisdicción, en cuanto, por un lado, sus integrantes formarán parte de los departamentos donde prestan servicios y, por el otro, dependerán de la dirección general, desde el punto de vista profesional.

Me encuentro con dificultades para entender cómo va a ser posible la existencia de esta doble dependencia sin que se produzcan conflictos o rozamientos. Conocemos —y ya ha hecho referencia a este respecto el señor diputado Absalón Rojas— el considerable desarrollo que adquiere el derecho administrativo en nuestro tiempo. A medida que las funciones del Estado se ex-

tienden, nuevas ramas dentro de la disciplina del derecho administrativo van integrando este cuerpo de doctrina, que es reacción contra el viejo derecho quirritario y el concepto absoluto del Estado.

Tampoco puede decirse que este proyecto persigue un propósito de economía, desde el momento que no se planea la estructura de ese Cuerpo de Abogados del Estado, pues sencillamente se establecen las bases para su creación, pero no se lo organiza en las distintas jerarquías en que debiera ordenarse. Tanto es así, que el artículo 12 del proyecto dice que: «Una vez constituido el cuerpo sobre tales bases —las que se mencionan en artículos anteriores— se estudiarán las vacantes que se pudieran llenar y las que en lo sucesivo convenga ocupar, y se llamará a concurso oposición para completar el número de funcionarios componentes del cuerpo.» No puedo explicarme, si todos los cargos de presupuesto están actualmente provistos y desempeñados por distintos funcionarios letrados de la administración pública, cuáles son las vacantes que habrán de llenarse por concurso de oposición, y menos cómo ellas pueden surgir sin que haya una estructura y una jerarquía administrativa que ubique a cada funcionario dentro de una función específica. Y esto es también interesante, porque es indudable que aun admitiendo la especialización dentro de la rama del derecho administrativo es necesaria todavía una especialización de un grado ulterior. No es lo mismo el derecho fiscal, impositivo y penal, que el derecho de aguas o que el derecho sobre registros públicos o que el derecho sobre lo contencioso administrativo o el derecho sobre licitaciones y contratos de la administración pública o el derecho de otras diversas ramas.

No se realiza tampoco la integración del cuerpo jurídico del Estado porque, como nos ha dicho anoche el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, los asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no han de integrar este cuerpo de abogados porque tienen jerarquía y calidad diplomática y, por lo tanto, no entran en el común de los representantes legales del Estado. Lo mismo va a ocurrir con los auditores de Guerra, de Marina y de Aviación.

**Sr. Rojas (A.).** — ¿Me permite, señor diputado?

Si los señores diputados abren el apéndice de gráficos en la página 4ª, que se relaciona con el cuerpo de abogados del Estado, verán que en contra de lo que ha dicho el señor ministro ayer—y por eso le dirigí yo la pregunta— aparece como dependencia del cuerpo de abogados del Estado la asesoría legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, no obstante lo que dijo el señor ministro.

**Sr. Dellepiane.** — Es que en ese momento Figueroa podía más que el ministro.

**Sr. Rumbo.** — Es que se ha introducido un perfeccionamiento. ¿O el señor diputado no admite la teoría de la perfectibilidad?

**Sr. Rojas (A.).** — Lo que digo es que este plan no tiene plan, porque todos los días se somete a rectificación.

**Sr. Rumbo.** — No, señor diputado.

¿El señor diputado sostiene la teoría de que las cosas no son perfectibles?

**Sr. Baulina.** — Si me dejan los señores diputados, voy a terminar mi exposición.

Yo creo que el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto tiene razón por los fundamentos que he dado. No es lo mismo la situación de los señores asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuya actividad profesional y cuya disciplina versan exclusivamente sobre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, que la que puedan tener, por ejemplo, los asesores del Ministerio de Hacienda. Por eso yo creo que el propósito de centralización, si bien en principio es aceptable y perfectamente como dice el señor diputado Rumbo, no se cumple con el proyecto que estamos considerando.

Tengo otras observaciones que se refieren a detalles en particular que rápidamente las voy a enunciar para abreviar posibles intervenciones al tratarse el asunto en particular.

En el artículo 15 se dice: «Ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionarios que específicamente ejerza función para la que necesite el título de abogado sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado.» Quiero creer que este artículo sólo se refiere a reparticiones autárquicas porque las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo carecen del poder de efectuar nombramientos. Por otra parte, no se define en el proyecto qué valor tiene o se le adjudica al parecer, dictamen o ponencia, como se dice en el nuevo lenguaje administrativo, de la Dirección de Abogados del Estado. Se limitará a «oír previamente», pero cabe suponer —ya que el proyecto no lo dice— que siempre la autoridad con facultad de nombramiento se reserve resolver lo que mejor le venga en gana.

Quiero referirme a otra disposición que está contenida en el artículo 13 del proyecto y que me parece de alguna gravedad. Me refiero al inciso 4º del artículo 13 —artículo que habla de los requisitos para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado— y que dice: «Informes de conducta dimanados de las autoridades y de una investigación especial.» Uno puede pensar —y no creo decir ninguna cosa extraordinaria ni pecar de suspicaz— que el informe de las autoridades ha de ser decisivo y que esto implica

crear, desde ya, una barrera insalvable para el candidato que no cuente con el *placet* de la autoridad encargada de informar sobre la conducta del aspirante, que no podrá ingresar en el cuerpo de abogados.

En el artículo 18 se dice: «La dirección central del cuerpo seleccionará los funcionarios que actualmente presten servicios, inclusive sometiendo a concurso oposición.» Esto parece ser una puerta abierta a una reorganización que dejo a la apreciación de los señores diputados.

**Sr. Colom.** — Al Poder Ejecutivo no le hace falta la disposición; tiene facultades para hacerlo.

**Sr. Baulina.** — Sí, señor diputado; pero resulta más elegante que el Poder Ejecutivo lo haga por ley, y no arbitrariamente.

**Sr. Rumbo.** — La Constitución lo prevé, señor diputado.

**Sr. Baulina.** — El presidente de la Nación tiene facultades para efectuar los nombramientos, salvo cuando la Constitución nacional o las leyes especiales establecen otros requisitos.

**Sr. Rumbo.** — Pero ninguna ley puede estar por encima de la Constitución.

**Sr. Baulina.** — ¿Para qué vamos a conceder una facultad que ya tiene el presidente de la Nación? Creo, como decía el señor diputado Ravnani en la sesión de ayer, que todo aquello que sobra en una ley es contrario a la técnica jurídica y es propicio a interpretaciones contrarias de los principios constitucionales a los que se pretende reconocer o dar nueva validez por una ley especial.

**Sr. Colom.** — Es por aquello de que lo que abunda no daña.

**Sr. Rumbo.** — Lo que ocurre es que el señor diputado está atribuyendo intenciones.

**Sr. Baulina.** — No atribuyo intenciones. Lo que quiero poner en evidencia es cuál puede ser la conducta de un gobierno cualquiera. Me refiero a las fallas de la ley, a lo que ellas pueden dar lugar, no a lo que hará este Poder Ejecutivo. Me basta que la ley permita una intención fuera de lo racional en su aplicación, para considerar que la ley es defectuosa.

**Sr. Colom.** — ¿Pero qué intención puede tener el Poder Ejecutivo?

**Sr. Baulina.** — Es contrario a toda racionalidad prejuzgar intenciones. Cuando se dicta la ley, nosotros debemos ponernos en presencia de sus posibles consecuencias, incluso de su mal cumplimiento, de su aplicación abusiva o de las desviaciones del poder, que pueden producirse aún con las mejores intenciones.

Dejé esta manera breve —porque no había tenido oportunidad de conocer el despacho antes del día de ayer— dejó enunciado el motivo por el cual voy a votar en contra de este proyecto, no obstante que, como lo dijera al prin-

cipio, soy partidario de una racionalización, incluso en el servicio de asistencia jurídica.

Mi modesta experiencia me aconseja que debe haber un principio de unidad, pero esa unidad no debe alcanzar un grado tal que destruya el principio de la especialización en las distintas ramas de las secretarías de Estado, y que ahogue la independencia con que debe manifestarse siempre la opinión jurídica, sino que discipline en una sola organización las ramas más diversas y variadas que no caben en la comprensión y en la sabiduría de un solo hombre.

**Sr. Rumbo.** — Es decir que el señor diputado está de acuerdo con el principio del planismo como forma de gobierno.

**Sr. Baulina.** — Sí, señor; pero del planismo con verdaderos planes.

**Sr. Rumbo.** — Está en total disidencia con lo que acaba de sostener su compañero de sector.

**Sr. Rojas (A.).** — Es que esto no es un plan.

**Sr. Baulina.** — La disidencia no está en aceptar el principio del plan o en rechazarlo. La disidencia está en llamar plan a lo que realmente lo es y en no llamar plan a las cosas que no lo son. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Pontieri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Díaz Colodrero.** — Voy a decir dos palabras para explicar el sentido de la disidencia demócrata, que lleva mi firma al pie del despacho que está a consideración de la Honorable Cámara.

Este proyecto de ley de creación del Cuerpo de Abogados del Estado, fué uno de los primeros despachados por las comisiones de entre los proyectos que forman parte del llamado plan de gobierno o plan quinquenal.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Ricardo C. Guardo.

Por una razón de oportunidad parlamentaria yo establecí mi disidencia en el entendimiento de que a raíz de la consideración de esta ley se iba a plantear el debate de fondo, integral, sobre el plan quinquenal. Había razones para que así lo hiciera, porque en su trámite parlamentario el plan quinquenal ha sido diluido y desmenuzado. El Senado lo ha considerado en forma de leyes sueltas, sin tener en consideración su integridad, su totalidad, que es en lo que hace especial hincapié el Poder Ejecutivo en la propaganda que a todas voces e instantes hace de su plan de gobierno, propaganda que el gobierno de la Nación lleva a la calle aun en forma violenta, como son, las derivaciones que hemos conocido hace pocos días de los atentados contra los grandes diarios argentinos a raíz de un acto de difusión del plan quinquenal.

**Sr. Rumbo.** — Por intervención de elementos extraños, señor diputado.

**Sr. Díaz Colodrero.** — Hasta ahora no se ha aclarado eso.

**Sr. Albrieu.** — Entonces, ¿por qué le carga la responsabilidad al gobierno?

**Sr. Díaz Colodrero.** — Quisiera que lo aclarara muy pronto.

**Sr. Decker.** — ¿Qué fundamentos tiene el señor diputado para achacar la responsabilidad al Poder Ejecutivo?

**Sr. Rumbo.** — Es elegante atribuirlo al Poder Ejecutivo.

**Sr. Díaz Colodrero.** — Esas masas atacaron a «La Prensa», a «El Mundo» y a «La Vanguardia»...

**Sr. Colom.** — Masas extrañas a nuestro movimiento.

**Sr. Albrieu.** — Si el señor diputado reconoce que no se pudo establecer el origen de esas masas, ¿por qué carga la responsabilidad al Poder Ejecutivo?

—Hablan varios señores diputados simultáneamente.

**Sr. Díaz Colodrero.** — Parece que fuera imperante en la Cámara considerar este proyecto de ley aparte del plan quinquenal, como se hizo con la relativa al Servicio Exterior, que ya tratamos. Yo me encuentro en situación de extrema minoría y respeto la voluntad que decididamente se impone a la Cámara.

Por ello, me voy a concretar, en la discusión en particular, a fijar los puntos de disidencia de esta ley, en especial adhiriendo al concepto que expresara el señor diputado por Santiago del Estero, doctor Rojas, de que la ley de creación del Cuerpo de Abogados del Estado es lo menos malo que hay en este heterogéneo plan quinquenal.

**Sr. Rumbo.** — ¡Menos mal!

**Sr. Vischi.** — Primero se dijo que era lo mejor del plan quinquenal.

En cuanto al asalto a los diarios, se debe a la falta de cultura del pueblo, cuya responsabilidad es de ustedes.

**Sr. Rumbo.** — Es la pesada herencia que tenemos.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente (Guardo).** — Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Legislación General.

—Resulta afirmativa de 56 votos; votan 81 señores diputados.

**Sr. Presidente (Guardo).** — En consideración, en particular, el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Díaz Colodrero.** — Señor presidente: el artículo 1º dispone la creación del Cuerpo de Abogados del Estado. Dice que tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración. Aparte de que esta redacción es impropia, porque debería decir que es un Cuerpo de Abogados del Estado que tendrá a su cargo la defensa de los intereses de la Nación, se observa también que no se crea una relación de dependencia entre este cuerpo de abogados y alguno de los ministerios encargados de la administración nacional.

Deseo conocer cuáles son las razones para crear esta entidad en el aire, sin someterla a la relación de dependencia que debe tener con respecto a uno de los ministerios del Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente** (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

**Sr. Sarraute.** — Evidentemente, por el artículo 1º se establecen las funciones de ese Cuerpo de Abogados del Estado, que son las funciones

específicas de asesoramiento y a la vez de defensa de los intereses del Estado en los juicios en que intervenga.

Es claro que la objeción que hace el señor diputado preopinante tiene cierto fundamento. Tal vez sería necesario que se especificara el ministerio de que ha de depender este organismo. Pero nosotros tenemos en nuestra organización un conjunto de leyes especiales que han ido creando los fiscales de cámara, los fiscales de tribunales federales e, incidentalmente, la creación del procurador del Tesoro y del procurador general de la Nación. Y esos funcionarios que tienen la misión de la defensa del Estado, que ahora se le adjudica al cuerpo del Estado, tal vez pudiera desprenderse que implícitamente ya tienen esas facultades legales acordadas por esas leyes especiales sin necesidad de disponerlas acá.

**Sr. Presidente** (Guardo). — Ha llegado la hora fijada como término de la sesión de la mañana. Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta las 15 y 30 horas.

—Es la hora 12 y 35.